

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 25° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-39832-2018
CARATULADO : SADARANGANI/RUTA DEL MAULE SOCIEDAD
CONCESIONARIA S.A.

Santiago, quince de Septiembre de dos mil veintidós

VISTOS:

En folio 1 de la carpeta electrónica, compareció don JAVIER SADARANGANI LEIVA, historiador, domiciliado para estos efectos en Nueva Amunátegui n° 1405, oficina 404, comuna de Santiago, quien interpuso en juicio ordinario de menor cuantía, una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, y, **en subsidio**, una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., persona jurídica del giro de su denominación, cuyo representante legal es don Mario Ballerini Figueroa, ambos con domicilio en Cerro El Plomo 5630, piso 10, comuna de Las Condes; en virtud de los argumentos de hecho y derecho que se reproducen a continuación:

I.- En cuanto a la acción principal, de indemnización por responsabilidad contractual:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Sostuvo que el día 19 de febrero del año 2016, se dirigía junto a su madre y su tío, a visitar a unos familiares que residen actualmente en la ciudad de San Carlos, en la Región del Biobío. El camino escogido fue la carretera 5 Sur. Al llegar al kilómetro 254, a la altura de la ciudad de Talca, iba manejando su auto Chevrolet Corsa, año 2006,



Foja: 1

placa patente YU7301, cuando por estar cerca de la ciudad de Talca, el flujo vehicular aumentó, y por ello se vio en la necesidad de disminuir la velocidad, bajando de 100 a 80 kilómetros por hora. Yendo por la pista de aceleración se percató de que había una persona en la orilla externa de la carretera que daba hacia el poniente, dispuesta o con ánimo de cruzar la carretera a unos 200 metros de distancia. En ese momento bajó más la velocidad porque al momento de haber visto al hombre, este se coloca en la mitad del sentido sur de la carretera, llegando la velocidad del auto a unos 70 Km por hora. En ese momento es cuando la persona en un acto temerario, buscó impactar con su auto, logrando su objetivo, colisionando al sujeto y lesionándolo de manera casi letal. En una medida desesperada se orilló, arriesgando su vida y la de las personas que venían con el actor, pues tuvo suerte de no ser interceptado por algún vehículo que mantuviera su velocidad cruce. Pudo bajarse y se percató del daño. El sujeto había saltado por los aires, situación que le provocó un gran daño al chocar contra el pavimento, quedando con riesgo vital. La familia del actor y este, estaban llenos de vidrios que les provocaron fisuras en la piel, pues la persona, con la fuerza del impacto, hizo estallar el parabrisas en miles de partículas peligrosas, alegó.

Expuso que la investigación arrojó la inocencia del actor, tal como consta en causa Ruc 1600175185-2 conocida ante el Juzgado de Garantía de Talca, documentación que se acompañará en la etapa procesal correspondiente. De hecho, en el parte denuncia que se adjuntará y que es parte de la causa ruc antes citada, se establece que el suceso principia con una llamada a la central de comunicaciones CENCO (Central de comunicaciones de Carabineros de Chile), ya que un individuo trataría de lanzarse a los vehículos que transitaban por el sector, cerca de la Ruta 5 Sur, próximo al puente Piduco. Lamentablemente al momento de la llegada de Carabineros, el sujeto ya se había lanzado a su automóvil, y yacía en el pavimento con lesiones de carácter grave, indicó.



Foja: 1

Refirió que, a raíz del accidente su vehículo sufrió un daño emergente avaluado en \$300.000.- los que pidió se reintegren a su patrimonio, pero más grave aún ha sido lo traumático de haber pasado por una situación como la descrita, lo que ha perjudicado su salud mental, impidiéndole manejar con tranquilidad, modificando su estilo de vida, adoptando una actitud temerosa y pusilánime, señaló.

EL DERECHO:

Indicó que su parte considera que la naturaleza de la obligación que se demanda en estos autos es de naturaleza legal y contractual.

Por otro lado, alegó que diferentes son las disposiciones y cuerpos normativos que contiene nuestro ordenamiento jurídico referente a la materia en cuestión, a saber:

1.- Señaló que el Decreto con fuerza de ley N° 850 del Ministerio de Obras Públicas, de 12 de septiembre de 1997, publicado en el Diario Oficial de 25 de febrero de 1998, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, y del Decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, en su artículo 87 autoriza al Ministerio de Obras Públicas para ejecutar obras públicas mediante el sistema de concesiones, aludiendo luego (en su artículo 88) a la normativa específica que las regulará.

2.- Refirió que el Decreto N° 900 del Ministerio de Obras Públicas, de 31 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial de 18 de diciembre de 1996, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de ley N° 164 del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, también denominada “Ley de Concesiones de obras públicas”.

3. Mencionó que el Reglamento del Decreto con fuerza de ley N° 164 del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, modificado por las Leyes N° 19.252 de 1993 y N° 19.460, de 1996, contenido en el Decreto N° 956 del Ministerio de Obras Públicas de 6 de octubre de



Foja: 1

1996, publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1999 también denominado “Reglamento de la Ley de Concesiones de obras públicas”, por mandato normativo, forma parte integrante de los contratos de concesión que celebre el Ministerio de Obras Públicas en la materia (artículo 1° inciso 1°).

4.- Refirió que el Decreto Supremo N° 21 de 12 de enero de 1996, publicado en el diario oficial el 13 de marzo de 1996, adjudicó la concesión.

5.- Indicó que el Reglamento Interno de Servicio de las Obras de la Concesión Ruta 5 Tramo Talca Chillán, también es parte de las normas mencionadas.

Expresó que, junto con lo anterior, se añaden otros instrumentos regulatorios específicos, como la oferta técnica y la oferta económica presentada por el consorcio Ecovías y el Manual de carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP, incluida la normativa de Puentes dispuesta por el Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad del MOP y los instructivos del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del MOP, entre otros.

Por otro lado, argumentó que la acción tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad contractual de la parte demandada y obtener una justa reparación pecuniaria de los perjuicios sufridos por su parte a consecuencia del accidente de tránsito que ya se ha relatado anteriormente. De esta manera, pide que se declare en su favor, las sumas que se exponen en el libelo, derivadas de la responsabilidad que le cabe a la demandada Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., por incumplimiento del contrato innominado, derivado del uso de la autopista Ruta 5 sur tramo Talca-Chillán, ya que la demandada no ha dado cumplimiento a las obligaciones que para ella derivan de ese contrato, de construir la defensa necesaria del camino en el lugar donde ocurrió el impacto, de manera que fuera un elemento de seguridad para quienes lo usan en el sentido de restringir



Foja: 1

el acceso tanto de personas como de animales a la autopista, con el fin de evitar accidentes, lo que claramente fue contravenido por la demandada, otorgando precarias e insuficientes medidas de seguridad para los usuarios de la autopista, sostuvo.

Afirmó que los hechos relatados muestran un grave perjuicio que se ha causado a su persona en razón del incumplimiento de la demandada Sociedad Concesionaria Ruta del Maule S.A. del contrato innominado que surge desde el preciso momento en que los usuarios transitan por la Ruta 5 Sur en el tramo de la concesión Talca-Chillán que administra la demandada. En efecto, existe un grave incumplimiento al deber de cuidado a que está obligado el concesionario en la habilitación de las protecciones y barreras dispuestas en el camino, las que bajo ninguna circunstancia deben permitir el ingreso de personas a la autopista, indicó.

Expuso que, en lo referente a la existencia del contrato, no existe modo alguno de transitar por esta sección del tramo concesionado en el que se encuentra el lugar del accidente sin haber ejecutado este contrato innominado al que se ha referido. Es particularmente relevante considerar que la forma de celebración de este contrato es meramente consensual, por cuanto queda perfeccionado desde el momento que se hace uso de las instalaciones concesionadas a la demandada en estos autos, y en que el pago del peaje en la ruta no es más que una acreditación adicional de que la voluntad de las partes ha coincidido en el interés de, por una parte utilizar la carretera en las formas definidas por las leyes y reglamentos aplicables a la materia; y por parte de la Concesionaria, de permitir la utilización de esta carretera ofreciendo garantías de seguridad a sus usuarios recibiendo como remuneración un pago denominado tradicionalmente en nuestro país como “peaje”, sostuvo.

Alegó que esta denominación no es irrelevante, por cuanto coincide con la denominación que la doctrina extranjera ha dado a



Foja: 1

este contrato que en nuestro país asume el carácter de innominado. En efecto, la doctrina argentina se ha referido a él como “contrato de peaje”; mientras que en España se le ha mencionado como “contrato de autopista”, por mencionar solo a algunos.

Manifestó que se puede complementar la caracterización de este contrato como bilateral, consensual, oneroso y conmutativo, regido principalmente por el derecho privado sin perjuicio de tener consideraciones de orden público, en razón de referirse directamente a la libertad de locomoción reconocida por nuestra Constitución.

Refirió que el incumplimiento de este contrato, implica la responsabilidad de la concesionaria demandada en razón del incumplimiento de al menos las siguientes normas jurídicas, a saber, el artículo 35 del Decreto Supremo 900 del 18 de diciembre de 1996, conocido como Ley de Concesiones de Obras Públicas, que señala: “el concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionen a terceros”, según citó. Agregó que esta responsabilidad, según el artículo 21 de la misma norma legal, se regirá por las reglas del derecho privado, esto es, el Derecho Civil común. Pues bien, desde la perspectiva del derecho común el artículo 1545 del Código Civil señala “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Más específicamente los artículos 1556 y 1553 N°3 del Código Civil declaran respectivamente: “La indemnización de perjuicios comprenden el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el incumplimiento”, “Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de las tres cosas, a elección suya: (...) 3° Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.”, expresó.



Foja: 1

Señaló que, en efecto, la obligación incumplida por la demandada es una obligación de hacer, por cuanto debió instalar y posicionar las barreras de contención suficientes como elementos de seguridad, de manera que puedan evitar peligros y perjuicios a las personas que transitan por el tramo de carretera que se le ha concesionado por el Estado. De aquí entonces, se origina la responsabilidad que debe ser cubierta por esta demandada.

Indicó que, del tenor del artículo 1556, no cabe duda alguna que el contratante incumplidor debe cumplir con la indemnización del daño emergente y la del lucro cesante, ya que lo señala expresamente, sin embargo en las últimas décadas tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido ampliamente la posibilidad de indemnizar el daño moral que surge del incumplimiento del contrato, sobre todo cuando se está frente a situaciones como las que justifican la demanda. Una interpretación diversa desconocería el mandato Constitucional del artículo 19 N°1 en cuanto garantiza a todas las personas “el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; aspectos que se nos han vedado y limitado gravemente por el actuar negligente y descuidado de la demandada, indicó.

Alegó que numerosos fallos ya han reconocido esta indemnización en el ámbito de la responsabilidad contractual, tal como se acreditará en la tramitación de esta causa, pero la conceptualización específica de qué es lo que se concibe como daño moral no es una consideración a omitir, para efectos de la demanda. Efectivamente, una primera concepción de daño moral es aquella que lo caracteriza como aquel que surge directamente del dolor que sufre la persona natural afectada por un hecho antijurídico. Este concepto ha dado lugar a la tradicional asimilación del daño moral con el concepto del pretium doloris. De esta forma, los perjuicios que ha relatado en la demanda, y que ha sufrido personalmente, se pueden encasillar en forma independiente en cualquiera de las clases o conceptos de daño moral que ha recogido la doctrina y la



Foja: 1

jurisprudencia, por cuanto se hace imperioso que se restituya el imperio del Derecho declarando la más amplia responsabilidad de la empresa concesionaria demandada, de tal modo de considerar una valorización del dolor sufrido por el demandante, sino que llegando a compensar, del mejor modo posible, el cambio de vida, la imposibilidad de poder desarrollarse de la misma forma en que se hacía hasta antes del accidente, las molestias propias de su actual condición de vida, e incluso la proyección de los efectos del incumplimiento del deber de cuidado hacia el futuro, señaló, citando enseguida doctrina sobre el particular.

Argumentó que, además, la demandada Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. administra un bien nacional de uso público que constituye la carretera conocida como Ruta 5 Sur o Panamericana cuya construcción el Estado le solicitó bajo el sistema conocido como “Construcción, Operación y Transferencia”, (conocido por sus siglas en inglés B.O.T., Built, Operate and Transfer), según el cual el operador o concesionario construye y opera las obras para luego, llegado el plazo fijado en las bases de licitación y en el contrato de la concesión deba transferir las obras al Fisco, quien podrá volver a licitarlas para su renovación o bien administrarlas directamente. El artículo 23 de la Ley de Ley de Concesiones de obras públicas, en adelante LCOP, dispone lo siguiente: “El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el siguiente: 1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, y 2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará, especialmente, a: a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación, y b) Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales, debidas a caso fortuito o fuerza mayor,



Foja: 1

cuyos efectos serán calificados por los contratantes, conviniendo las medidas que sean necesarias para lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. El valor de las obras será acordado entre los contratantes y, a falta de acuerdo, las partes podrán recurrir a un peritaje, que determinará, ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación, la calificación, medidas o evaluación, según el caso. Las partes concurrirán al pago del precio según los términos del contrato de concesión.”, citó. Por su parte el artículo 29 del mismo cuerpo legal establece que las bases de licitación deberán indicar explícitamente los niveles de servicio exigidos para la etapa de explotación, sus respectivos indicadores y las sanciones, las que luego deberá cumplir el concesionario de manera obligatoria como estándar mínimo en calidad y seguridad de las obras ante los usuarios. En virtud de este incumplimiento, la negligencia en el actuar del porteador ha producido el daño que he sufrido tanto físico como moral, señaló.

Expresó que la doctrina y nuestra jurisprudencia están contestes en que para solicitar una indemnización de perjuicios producto de la responsabilidad contractual, tienen que concurrir los siguientes requisitos copulativamente:

1.- Señaló que en primer lugar debe existir un contrato, y en la especie, se está en presencia de un contrato innominado de concesión, pues si bien no está regulado expresamente en nuestro Código Civil, existe un marco jurídico expuesto precedentemente y que regula los derechos y obligaciones a que debe atenerse la autopista demandada en orden mantener la concesión de la autopista por la que transitaba al momento del accidente en determinadas condiciones específicas de seguridad.

2.- Refirió que en segundo lugar, debe existir un incumplimiento contractual, el incumplimiento de una obligación que emane de un contrato ejecutado válidamente entre las partes, y en la especie, la demandada no cumplió con sus obligaciones derivadas del contrato de



Foja: 1

concesión puesto que su actuar negligente no sólo impidió que llegara al destino deseado, sino que provocó un accidente que me causo un daño psicológico del cual aún no he podido recuperarme.

3.- Indicó que en tercer lugar debe existir el daño o perjuicio, el que se define como “La lesión o afectación, ya sea de un derecho subjetivo reconocido formalmente, sea de un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter privado” (Sentencia Corte Suprema, 4 de Agosto de 1933, RDJ, t.30, sec. 1°, p.524).

Refirió que, a partir de los hechos narrados es evidente que su parte ha sufrido una serie de daños como consecuencia del actuar negligente de la demandada.

Alegó que, respecto del daño emergente, estos perjuicios corresponden al daño emergente sufrido en el vehículo que transportaba al actor y parte de su familia, sufriendo daños de consideración en la parte delantera, motivo del choque con un peatón que bajo ningún punto de vista se debió encontrar en ese lugar, y que sin embargo lo estaba, producto de la facilidad que tuvo para poder ingresar a la autopista. El valor correspondiente a las reparaciones de las cuales tuvo que ser objeto el automóvil corresponde a la cifra de \$300.000.- Por lo que solicita que esta cifra sea reintegrada en su totalidad al patrimonio del demandante.

Agregó que dentro del daño emergente sufrido en su patrimonio hay que agregar también el dinero invertido en todas aquellas sesiones de terapia psicológica, las cuales han sido de urgente necesidad para tratar de superar la conmoción que le ha generado este accidente, que dejó profundas marcas en su carácter y por las cuales las consecuencias permanecen hasta el día de hoy. El valor de lo que se pide por concepto de indemnización en cuanto a la terapia psicológica asciende al monto de \$300.000, señaló.



Foja: 1

Indicó que ambos montos, tanto los correspondientes a la reparación del automóvil, como a los correspondientes por terapia psicológica serán debidamente acreditados en la etapa procesal correspondiente.

Alegó que el daño es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extra patrimonial.

Expuso que en el caso de marras el daño consistió principalmente en el daño moral, situado en el ámbito extra patrimonial que nace a raíz de la impotencia de no poder manejar un automóvil con tranquilidad, de la manera en que solía hacerlo, generando frustración y cuadros de angustia que se constatarán con la prueba que se acompañará en el período procesal correspondiente, el cual su parte avalúa en la suma de \$15.000.000.-

4.- Alegó que, en cuarto lugar, debe existir culpa o dolo. La culpa es definida como “La falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus negocios propios” (Alessandri Rodríguez, Arturo, “De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno”, Imprenta Universitaria, Santiago 1943. p.172). El Código Civil define la culpa en su artículo 44 el que señala “La ley distingue tres tipos de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido



Foja: 1

levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”, según citó. Por otra parte, el dolo es definido por el inciso final del artículo antes citado en los siguientes términos: “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, citó.

Expresó que, para saber de qué culpa responde el deudor es necesario hacer mención al artículo 1547 del código de Civil el que señala en su inciso primero que el deudor “es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes”, citó. Agrega dicha norma, en su inciso tercero que “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”, indicó. En virtud del inciso recién transcrito, quien debe probar que actuó con la diligencia debida es el deudor, en este caso la demandada, ya que era ella la obligada a cumplir con la debida diligencia sus obligaciones derivadas del contrato de concesión, señaló.

5.- En quinto lugar, indicó que debe existir moral del deudor, y la mora se define como el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación que va más allá de la interpelación del deudor. El artículo 1551 del Código Civil señala que “El deudor está en mora, 1° Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. 2° Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 3° En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido.”, según citó.

Sostuvo que la mora, en el presente caso, se origina de acuerdo al número 3 del artículo recién citado.



Foja: 1

6. Expresó que, en sexto lugar, debe existir una relación de causalidad entre el incumplimiento a lo menos culpable y el daño producido, y, en su concepto, no hay duda alguna de que el no cumplimiento de las obligaciones que emanaban del contrato de concesión por parte de la demandada, ocasionaron en el actor un perjuicio, especialmente a nivel emocional, que de haber cumplido el demandado con sus obligaciones de manera diligente, estos nunca se hubieran producido.

Petitorio de la acción principal. Solicitó que en definitiva se declare:

1.- Que se acoge la demanda por responsabilidad contractual en todas sus partes y que por lo tanto la demandada queda obligada al pago de \$15.000.000.-, por concepto de daño moral o la suma que el tribunal determine y considere apropiada en conformidad al mérito del proceso;

2.- Que la demandada quede obligada al pago de \$600.000.- por concepto de daño emergente.

3.- Que las sumas demandadas deben ser pagadas debidamente reajustadas según la variación del IPC entre la fecha de ingreso de la demanda y la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia de autos que acoja la demanda.

4.- Que la demandada queda obligada a pagar las costas de la causa.

II.- En cuanto a la acción subsidiaria, de indemnización por responsabilidad extracontractual:

HECHOS:

Indicó que, respecto de los hechos, y a fin de evitar dilaciones innecesarias, son los mismos hechos que se señalan en la acción principal, dándolos por expresamente reproducidos.



EL DERECHO:

Alegó que la acción subsidiaria tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la parte demandada y obtener una justa reparación pecuniaria por los perjuicios sufridos por el demandante a consecuencia del accidente de tránsito que ya se ha relatado anteriormente.

Expresó que, como antecedente previo, el Estado de Chile, a través del ministerio de Obras Públicas, encomendó vía concesión a la empresa Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. la ejecución, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los kilómetros 219 y 412 de la ruta 5 Sur, denominada Concesión Ruta 5 tramo Talca-Chillán, que en su totalidad cubre 193 kilómetros. La citada concesión se rige por el Decreto Supremo N°900 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido y sistematizado del D.F.L. N°164 DE 1991, del mismo Ministerio, denominado Ley de Concesiones de Obras Públicas. Junto con la mencionada ley la concesión en cuestión se rige por el Reglamento de Concesiones y por Bases de Licitación para esta concesión en particular, indicó.

Refirió que las normas referidas habilitan al demandante para interponer la acción, toda vez que, en su concepto, se han contravenido por la parte demandada las obligaciones que le corresponden como concesionaria, provocándole graves perjuicios, los cuales deben ser justamente indemnizados.

Señaló que, como ha quedado demostrado en la investigación causa RUC N°1600175185-2 ventilada en el Juzgado de Garantía de Talca y cuya documentación dice que acompañará oportunamente en la etapa procesal correspondiente, su parte tuvo una conducta al volante total y absolutamente diligente, estando siempre atento a las condiciones del tránsito y manteniendo una velocidad en la conducción totalmente acorde a lo que corresponde a esta ruta concesionada. Por



Foja: 1

lo tanto cabe aseverar que quien suscribe no tuvo responsabilidad alguna en el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 254 de la ruta que la parte demandada tiene en concesión, estimó.

Refirió que, por otra parte, en cuanto a la responsabilidad extracontractual que tiene Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., debemos señalar que el artículo 1437 de nuestro Código Civil dispone "Las obligaciones nacen (...) ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley (...)." A su vez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2284 del Código Civil las obligaciones que se contraen sin convención y que nacen de un hecho ilícito, pueden tener su origen en un hecho cometido con la intención de dañar, denominado delito, o pueden originarse en un hecho culpable pero cometido sin intención de dañar, denominado cuasidelito. Conforme al artículo 2314 del Código Civil, "El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". El artículo 2316 del mismo código nos ilustra, "Es obligado a la indemnización el que hizo el daño, y sus herederos." Así como el artículo 2329 del mismo cuerpo legal citado establece que "Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta."; refirió.

Alegó que, de las normas citadas se concluye que para que un hecho o acción u omisión origine responsabilidad civil delictual o cuasidelictual, se requiere: 1) Que el hecho, acción u omisión sea culpable o doloso; 2) Que el hecho, acción u omisión culpable o doloso cause daño; 3) Que exista una relación causal entre el hecho, acción u omisión y los daños.

1) En cuanto al hecho, acción u omisión culpable o dolosa:

Señaló que, en su opinión, los hechos, acciones u omisiones en cuestión corresponden a una conducta culposa por parte de Ruta del



Foja: 1

Maule Sociedad Concesionaria S.A., a saber, nuestro Código Civil en su artículo 44° nos ilustra sobre la culpa y le otorga distintos tipos de graduación según el mayor o menor deber de cuidado que se exija, sin embargo en materia de responsabilidad extracontractual la culpa no se aplica en grados, sino que se exige directamente la Culpa Leve también llamada descuido leve o descuido ligero, definida en el mismo artículo 44 del Código Civil como "la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios", y se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. A su vez, nuestra jurisprudencia ha declarado que "la culpa es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios, y para la doctrina la culpa constituye una negligencia, falta de precaución o inadvertencia." Por último, la culpa puede nacer de una acción u omisión y que de acuerdo al artículo 44 del Código Civil, "Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve."; refirió.

Expuso que, por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones se estipula en su primer numerando "La sociedad concesionaria deberá adoptar, durante la concesión, todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesión de la obra.", citó.

Indicó que en definitiva la sociedad concesionaria no adoptó tales medidas, ya que de haberlas adoptado sería extremadamente dificultoso que una persona intente acceder a la autopista y cruzar la calzada durante más de treinta minutos sin que algún funcionario o trabajador de la autopista no advirtiera del grave peligro que representaba para los usuarios de la misma y por supuesto, del mismo peatón, que finalmente resultó atropellado y con lesiones de diversa gravedad.



Foja: 1

Alegó que, por su parte, las Bases de Licitación Refundidas, correspondientes a la concesión en cuestión nos indican en el punto 2.5.3.2 sobre Medidas de Seguridad y Control que “El Concesionario será responsable de establecer las medidas de control y seguridad en el tramo de la Concesión, sujeto a todas las disposiciones legales vigentes. El Concesionario es el responsable de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio, de modo de evitar accidentes y deberá responder ante toda acción legal que los usuarios pudieran entablar en su contra, debido a negligencias cometidas a este respecto. Para estos efectos deberá disponer de sistemas de vigilancia permanente y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna.”, citó. El mismo texto nos señala en el punto 2.5.3.5.1 correspondiente a Daños a los Usuarios “Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de obras de construcción o conservación, así como los daños que puedan ocasionar los baches o cualquier otra condición deficiente de la conservación de la obra, será de exclusiva responsabilidad del Concesionario a quien corresponderá efectuar las gestiones ante la Compañía de Seguros para que se efectúe el pago por esos daños.”, citó.

Indicó que también es importante destacar que el Reglamento de Servicio de la Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán es claro en cuanto a la responsabilidad y los deberes que esta tiene, normando en su artículo 11 los Derechos de los usuarios en cuanto a la seguridad, “El usuario tiene derecho a exigir todos los elementos de seguridad, control, supervisión y gestión, además de la infraestructura necesaria para que la obra mantenga su nivel de servicio.”, según citó.

Refirió que el mismo texto legal regula específicamente la manera en que los peatones deberán hacer uso de la autopista concesionada, de manera que establece claras disposiciones para ésta en cuanto a permitir peatones en las vías de circulación para automóviles, siendo responsabilidad de la autopista tomar todos los



Foja: 1

resguardos para que ninguna persona pueda acceder a las vías para los automóviles, esto queda claramente establecido en el artículo 22°, a saber, “Los usuarios podrán transitar a pie por las obras en concesión y sus accesos solo en caso de emergencia y/o para acceder al teléfono de emergencia más cercano. (...) Los peatones no podrán permanecer en las calzadas de las calles o caminos. El tránsito de los peatones deberá hacerse por las aceras y las pasarelas especialmente dispuestas para ello. Los peatones no podrán cruzar la calzada ni las defensas camineras de la mediana, sino en los lugares en que exista una pasarela peatonal habilitada al efecto.”, indicó.

Expresó que claramente la inobservancia de esta norma ha traído como consecuencia el accidente en que se ha visto involucrada esta parte, ya que la parte demandada no tomó los resguardos necesarios para evitar que una persona ingresara a la autopista concesionada e intentara en repetidas ocasiones cruzar la calzada, contraviniendo el recién citado artículo que regula expresamente esta conducta. Para mayor abundamiento, y siendo aún más ilustrativa la negligencia de la autopista concesionaria, cabe destacar que Carabineros de Chile recibió varias llamadas telefónicas alertando de una persona que intentaba cruzar la calzada aprovechando los pocos e insuficientes resguardos ofrecidos por la concesionaria, y que entre las primeras llamadas recibidas por Carabineros y el accidente objeto de este libelo el espacio de tiempo fue de más de treinta minutos, de manera tal que la negligencia de la parte demandada no sólo se debe a los pocos resguardos a la hora de prevenir que personas intenten acceder y cruzar la autopista, sino que también fue negligente en su actuar con nula celeridad frente a una situación que ya llevaba un largo periodo de tiempo ocasionándose. Situación que también es normada por este mismo cuerpo legal, estableciendo en su artículo 43°: “El concesionario será responsable de establecer las medidas de control y de seguridad en el área de concesión, sujeto a todas las disposiciones legales vigentes y a lo dispuesto en el artículo 11. El



Foja: 1

concesionario es el responsable de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio, de modo de evitar accidentes. Además, el concesionario deberá responder ante toda acción legal que los usuarios pudieran entablar en su contra, debido a negligencias cometidas a este respecto.”. Luego el mismo artículo nos dice “El concesionario actuará con la menor demora posible ante emergencias, ya sea, producto de caso fortuito o fuerza mayor, accidentes, incendios o cualquier otra situación que no admita espera.”, señaló.

Alegó que está claro, en su concepto, que el concesionario no tomó todos los resguardos ni todas las medidas de control y seguridad para evitar accidentes, de lo contrario no se entiende cómo una persona pudo fácilmente acceder a la vía y permanecer en ella por tan prolongado espacio de tiempo intentando cruzar la calzada, y aún más, la concesionaria ha actuado en completa contravención al mandato establecido para las emergencias, dejando que esta se suceda por largo espacio de tiempo con las terribles consecuencias que ya son conocidas, no tomando ningún resguardo, advertencia o comunicación alguna a sus usuarios para prevenir este peligroso accidente.

2) En cuanto al daño:

Argumentó que en cuanto a los daños provocados por el actuar negligente de la parte demandada, la gran mayoría de los artículos ya citados y que se dan expresamente por reproducidos, dejan en claro que la concesionaria debe responder en forma íntegra por todos los perjuicios que provocó su actuar descuidado, tal como también lo describe al artículo 50 del Reglamento de Servicio de la Obra, que regula los daños a terceros “El Concesionario será responsable de todos los daños, de cualquier naturaleza, que se cause a terceros con motivo de la explotación o conservación, así como los daños que puedan ocasionar los baches o cualquier otra condición deficiente de la conservación de la obra.”. Estas disposiciones son una constatación



Foja: 1

de que la responsabilidad de la Concesionaria Ruta Maule tramo Talca-Chillán con esta parte es clara e ineludible, debiéndose responsabilizar por todos los perjuicios que provocó su actuar negligente, indicó.

Respecto del daño emergente sufrido en el vehículo que transportaba al actor y parte de su familia, sufriendo daños de consideración en la parte delantera, motivo del choque con un peatón, que bajo ningún punto de vista se debió encontrar en ese lugar, y que sin embargo lo estaba, producto de la facilidad que tuvo para poder ingresar a la autopista; el valor correspondiente a las reparaciones de las cuales tuvo que ser objeto el automóvil corresponde a la cifra de \$300.000.- Por lo que se solicita que esta cifra sea reintegrada en su totalidad al patrimonio del demandante.

Agregó que, dentro del daño emergente sufrido en su patrimonio hay que agregar también el dinero invertido en todas aquellas sesiones de terapia psicológica, las cuales han sido de urgente necesidad para tratar de superar la conmoción que le ha generado este accidente, que dejó profundas marcas en su carácter y por las cuales las consecuencias permanecen hasta el día de hoy. El valor de lo que se pide por concepto de indemnización en cuanto a la terapia psicológica asciende al monto de \$300.000, indicó.

En cuanto al daño moral, argumentó que los perjuicios provocados en su persona se extienden también al ámbito del daño moral, debido a que el impacto provocado por este accidente fue tan grande que ha generado miedos y frustraciones en la vida cotidiana del demandante, y que se extienden hasta el día de hoy. Cabe destacar que una vez ya producido el atropello, constató que todos los tripulantes de su automóvil se encontraran en buen estado de salud y luego bajó del automóvil para poder ayudar a la persona que había sido atropellada, fue entonces cuando se enfrentó con la cruda realidad de los hechos, ya que el accidente provocó en esta persona



Foja: 1

lesiones de tal carácter que su cuerpo inconsciente yacía completamente ensangrentado y con visibles lesiones que hacían que se desfigurara, producto de la gran cantidad de huesos rotos que generó el impacto. Durante un lapso de tiempo de alrededor de 10 minutos hizo todo lo posible por prestar la mejor asistencia a la víctima del atropello, dentro de sus posibilidades y sus conocimientos que no comprenden los primeros auxilios, sin embargo en ningún momento se movió de su lado, esperando que llegara la asistencia médica y policial correspondiente, escenario que a cualquier persona que tenga una vida medianamente tranquila es capaz de provocar un gran desasosiego y terrible aflicción, como lo ha sido en este caso, refirió.

Indicó que protagonizar las circunstancias narradas producirían en la mayoría de las personas una conmoción tan grande que es difícil de olvidar, y su persona no ha sido la excepción, ya que además de no poder olvidar ese lamentable accidente, le ha causado un gran temor, que le ha impedido llevar la vida cotidiana a la cual estaba acostumbrado. A partir del accidente ha debido dejar de conducir automóviles, ya que siempre que está al volante recuerda el episodio del accidente, los vidrios en la propia piel, en la de su madre y de su tío, cortes que tiñeron de rojo el automóvil en que transitábamos, además del lamentable estado en que quedó el cuerpo del peatón atropellado. Esta dificultad al volver a conducir se ha reflejado en que tuvo que readecuar la forma en que se trasladaba cotidianamente por la ciudad, ya que hasta antes del accidente iba a su lugar de trabajo conduciendo un automóvil, y regresaba a su hogar de la misma manera, debiendo hacerlo ahora en transporte público, lo que le ha significado cambiar completamente sus horarios, ya que por las mañanas debe despertarse mucho más temprano para poder llegar al lugar de su trabajo, y por las tardes una vez que sale de su trabajo debe permanecer mucho más tiempo trasladándose, llegando a su hogar más tarde y más cansado, lo que se ha traducido en un enorme deterioro físico y emocional.



Foja: 1

Indicó que las consecuencias del accidente han sido para su parte de carácter permanente y sostenidas en el tiempo, debiendo considerar el trauma generado por la gran impresión del accidente y sumado a la conmoción provocada por las consecuencias en el cuerpo del peatón atropellado y la larga y extenuante exposición al mismo; el desgaste y perjuicios provocados por el cambio forzoso que ha debido hacer en su vida cotidiana, a lo que hay que sumar el impacto emocional que conlleva el perder de un día para otro una herramienta tan importante para la vida moderna como lo es el poder conducir un automóvil, perdiendo autonomía y haciéndole dependiente de factores externos, escenario que no era así hasta antes del accidente y por el cual cabe responsabilizar completamente a la concesionaria por su negligente actuar, señaló.

Alegó que, a todos estos perjuicios, hay que agregar las reiteradas idas al psicólogo que ha tenido que hacer, para lograr una necesaria sanidad mental, con el objeto de superar, dentro de lo que se pueda, este capítulo tan grave y terrible, que perfectamente pudo acabar no solo con la vida del peatón atropellado, sino que con la mía y de sus seres queridos que lo acompañaban en el automóvil. Estas constantes idas a terapia psicológica han significado molestias e invertir en ellas bastante tiempo, de manera que ha tenido que dejar de lado actividades familiares, de desarrollo personal y social, necesarias para cualquier persona, pero de las cuales lamentablemente muchas veces se he debido privar, situaciones y tiempo invertido que lamentablemente nunca volverá a recuperar. Es por estos motivos que por concepto de daño moral demanda la suma de \$15.000.000 o lo que el tribunal estime en derecho, todo ello con expresa condena en costas.

3) En cuanto a la relación de causalidad:

Argumentó que la conducta de Concesionaria Ruta Maule fue total y absolutamente descuidada y negligente, configuró infracciones



Foja: 1

a la Ley de Concesiones y a su respectivo Reglamento, a las Bases de la Licitación y al Reglamento de Servicio de Obras; siendo la responsable del accidente de tránsito que nos ocupa y causante de los perjuicios demandados. De este modo, existe una clara relación de causa a efecto entre la negligencia de la referida concesionaria, el accidente de tránsito y atropello, y los daños demandados, siendo la causa basal de tales daños el actuar culpable e infraccional de la Concesionaria Ruta Maule, estimó, agregando que, en suma, los perjuicios demandados no se habrían producido si la demandada hubiese obrado con la diligencia debida.

Petitorio de la acción subsidiaria. Solicitó que en definitiva se declare:

1.- Que se acoge la acción subsidiaria por responsabilidad extracontractual, en todas sus partes, y que por lo tanto la demandada quede obligada al pago de \$15.000.000.-, por concepto de daño moral o la suma que el tribunal determine y considere apropiada en conformidad al mérito del proceso.

2.- Que la demandada quede obligada al pago de \$600.000.- por concepto de daño emergente.

3.- Que las sumas demandadas deben ser pagadas debidamente reajustadas según la variación del IPC entre la fecha de ingreso de la demanda y la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia.

4.- Que la demandada quede obligada a pagar las costas de la causa.

En folio 14, consta el emplazamiento de la demandada.

En folio 17, se tuvo **por contestada la demanda en rebeldía** de la demandada.



Foja: 1

En folio 21, se celebró el comparendo de conciliación, notificado en folio 18, con la asistencia del apoderado del demandante y en rebeldía de la demandada, motivo por el cual, previo llamado, no se produjo conciliación.

En folio 23, compareció la parte demandada, a designar abogado patrocinante y apoderado, sin objetar la tramitación anterior.

En folio 26 se dictó la interlocutoria de prueba, notificada según consta en folios 28 y 35; contra la cual la demandada interpuso recursos de reposición y apelación subsidiaria en folio 29, resueltos en folio 35, en el sentido de acoger íntegramente la reposición, modificando la interlocutoria de prueba en la forma que allí se indica.

En folio 126, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que en la audiencia de folio 49, el testigo GABRIEL IGNACIO CORREA ROJAS, presentado por el demandante e individualizado en folio 36, fue tachado por la demandada, en virtud de las causales de los números 5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, porque ha prestado servicios profesionales remunerados al demandante, manifestando un interés en el resultado del juicio, al señalar que la recuperación del supuesto daño del demandante viene dada por la decisión del tribunal.

SEGUNDO: Que, evacuando el respectivo traslado, la demandante pidió el rechazo de la inhabilidad opuesta, alegando que no existe relación laboral entre su parte y el testigo, quien además señaló expresamente no tener interés en el juicio.

TERCERO: Que, en cuanto a la causal del N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, de los dichos del testigo no se desprende la configuración en la especie de los supuestos de hecho



Foja: 1

de la referida causal, ya que prestó el servicio de atención psicológica al demandante por un período acotado de tiempo, ya terminado, y no se advierte en la especie la existencia de una relación laboral habitual, actual y remunerada, que ligue al testigo con el demandante a la época de su declaración, motivos por los cuales será desestimada la tacha.

CUARTO: Que, en cuanto a la causal del N°6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, de los dichos del testigo tampoco se advierte la configuración en la especie de los supuestos de hecho de la referida causal, ya que expresamente respondió que no tiene interés en la recuperación del supuesto daño del actor, agregando que eso depende de la justicia.

QUINTO: Que, por otro lado, en la audiencia de folio 71, el testigo LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RUBIO, presentado por la demandada e individualizado en folio 37, fue tachado por la demandante, en virtud de la causal del N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por haber reconocido que tiene una relación laboral con la empresa Intervial, la cual a su vez presta servicios a la empresa demandada.

SEXTO: Que, al evacuar el respectivo traslado, la demandada solicitó el rechazo de la tacha, por cuando ha señalado el testigo expresamente que no tiene vínculo laboral con la demandada.

SÉPTIMO: Que, de los dichos del testigo, se advierte que expresamente señaló que no le presta servicios a la empresa demandada, y que no tiene ninguna relación laboral con la parte demandada, motivos suficientes para estimar que no se cumplen en la especie los presupuestos de hecho de la causal invocada, contenida en el N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual corresponderá desestimar la tacha.

II.- EN CUANTO AL FONDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXRCXBWETCK

Foja: 1

OCTAVO: Que don JAVIER SADARANGANI LEIVA, interpuso en juicio ordinario de menor cuantía, una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, y, **en subsidio**, una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., persona jurídica del giro de su denominación, cuyo representante legal, según señala el libelo, es don Mario Ballerini Figueroa, todos ya individualizados en autos, y, en virtud de los argumentos de hecho y derecho que se reproducen en la parte expositiva, solicitó lo siguiente:

I.- **En cuanto a la acción principal** de indemnización por responsabilidad contractual, solicitó que en definitiva se declare:

1.- Que se acoge la demanda por responsabilidad contractual en todas sus partes y que por lo tanto la demandada queda obligada al pago de \$15.000.000.-, por concepto de daño moral o la suma que el tribunal determine y considere apropiada en conformidad al mérito del proceso;

2.- Que la demandada quede obligada al pago de \$600.000.- por concepto de daño emergente.

3.- Que las sumas demandadas deben ser pagadas debidamente reajustadas según la variación del IPC entre la fecha de ingreso de la demanda y la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia de autos que acoja la demanda.

4.- Que la demandada queda obligada a pagar las costas de la causa.

II.- **En cuanto a la acción subsidiaria** de indemnización por responsabilidad contractual, solicitó que en definitiva se declare:

1.- Que se acoge la acción subsidiaria por responsabilidad extracontractual, en todas sus partes, y que por lo tanto la demandada quede obligada al pago de \$15.000.000.-, por concepto de daño moral



Foja: 1

o la suma que el tribunal determine y considere apropiada en conformidad al mérito del proceso.

2.- Que la demandada quede obligada al pago de \$600.000.- por concepto de daño emergente.

3.- Que las sumas demandadas deben ser pagadas debidamente reajustadas según la variación del IPC entre la fecha de ingreso de la demanda y la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia.

4.- Que la demandada quede obligada a pagar las costas de la causa.

NOVENO: Que se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado, lo que constituye aquello que la doctrina denomina contestación ficta, la que equivale a una negación de todos los hechos fundantes de la pretensión del actor, por lo cual corresponderá tener a tales hechos por íntegramente controvertidos.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la controversia de hecho ventilada en el proceso radica en dirimir acerca de la efectividad de haber ocurrido el accidente referido por la demandante; las circunstancias del mismo; la existencia de un contrato celebrado entre las partes, en relación al uso de la autopista donde ocurrió el referido accidente; el contenido del mismo; la efectividad de haber incurrido la demandada en un incumplimiento del mencionado contrato; la efectividad de haber sufrido daños el demandante con ocasión del accidente referido en su demanda; en la afirmativa, naturaleza, entidad y monto de los perjuicios alegados; la relación de causalidad entre un eventual incumplimiento contractual de la demandada y los daños alegados por el demandante; la existencia una acción u omisión culpable o dolosa de la demandada, en relación algún deber legal impuesto a la misma; y la relación de causalidad entre la acción u



Foja: 1

omisión atribuida a la demandada y los perjuicios alegados por el demandante.

UNDÉCIMO: Que el demandante, a fin de comprobar sus dichos, aportó al proceso las siguientes pruebas:

I.- PRUEBA DOCUMENTAL. Acompañada en folios 47 y 51, objetada parcialmente por la demandada en folios 57 y 117, objeciones que fueron desestimadas según consta en folios 118 y 124; y consiste en los siguientes documentos:

1. Copia autorizada de denuncia en causa RUC 1600175185-2, de la Fiscalía Local de Talca.
2. Documento titulado "Informe psicológico", emitido por Gabriel Correa, RUN 17.858.523-1, en calidad de Psicólogo Clínico.
3. BASES DE LICITACION Y CIRCULARES ACLARATORIAS de la CONCESION INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO TALCA – CHILLAN.
4. Decreto N° 21 de fecha 12 de enero de 1996, del Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Obras Públicas.
5. Copia del Reglamento DFL MOP N° 164 de 1991 modificado por las Leyes N° 19.252 de 1993 y N° 19.460 de 1996.
6. Copia del Reglamento de Servicio de la Concesión, de la CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN.
7. Copia del Decreto 900, del Ministerio de Obras Públicas, publicado el 18 de diciembre de 1996, cuyo título es: "FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP N° 164, DE 1991 LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS".



8. Bases de Licitación de la CONCESIÓN INTERNACIONAL
RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN.

II.- PRUEBA TESTIMONIAL. Ofrecida en folio 36, se tuvo presente en folio 38, y se rindió en la audiencia de folio 49, con la asistencia de los apoderados de ambas partes y el testigo ofrecido por la demandante, GABRIEL IGNACIO CORREA ROJAS, psicólogo, individualizado en folio 36, cuya inhabilidad opuesta por la demandada fue desestimada en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y quien, previamente juramentado en forma legal, y previa exhibición autorizada por el tribunal, del documento titulado “Informe psicológico”, señalado en el N°2 de la documental reseñada precedentemente, declaró, en lo pertinente, que es un informe elaborado por el testigo, respecto de su paciente, luego de un suceso traumático ocurrido hace tres años.

DUODÉCIMO: Que la demandada, con la finalidad de acreditar lo pertinente, incorporó al juicio las siguientes pruebas:

I.- PRUEBA DOCUMENTAL. Acompañada en folio 53, objetada parcialmente por la demandante en folio 60, objeción que fue desestimada en folio 85, en lo pertinente; y consiste en los siguientes documentos:

1. Bases de Licitación de la CONCESIÓN INTERNACIONAL
RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN.
2. Acta de audiencia de sobreseimiento en causa RIT 5990 –
2016, RUC 1600175185-2, del Juzgado de Garantía de
Talca.
3. Set de imágenes satelitales.
4. Set de fotografías en color de una vía pública.



Foja: 1

5. Formulario denominado "FICHA REGISTRO DE ACCIDENTES", emitida por "Ruta del Maule Soc. Con. S.A.", con motivo del accidente sub lite.
6. CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R. V. M., de fecha 23 de diciembre de 2019, respecto del vehículo inscripción YU.7301-1, a nombre de ANGELINA MERCEDES LEIVA AVILÉS desde el 23 de julio de 2008.
7. Set de fotografías correspondientes a la parte frontal del vehículo patente YU-7301.

II.- PRUEBA TESTIMONIAL. Ofrecida en folio 37, se tuvo presente en folio 39, y se rindió en la audiencia de folio 71, con la asistencia de los apoderados de ambas partes y el testigo ofrecido por la demandada, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RUBIO, conductor, individualizado en folio 37, cuya inhabilidad opuesta por la demandada fue desestimada en el considerando séptimo de esta sentencia, y quien, previamente juramentado en forma legal, declaró en lo pertinente, que en la autopista en cuestión se realizan patrullajes permanentemente, y en el sector del accidente hay rejas de separación, y las personas saltan la reja, o la rompen, o la roban, o la destruyen para evitar caminar dos metros más, y cuando están dañadas, ello se informa y se repara lo más pronto posible. Dijo que corresponde al Km. 254,200 de la Ruta del Maule, sector Norte-Sur. Señaló que su cargo es operador o conductor de vehículo de patrullaje y grúa de la empresa Eulen. Indicó que, al momento del accidente, no había desperfectos, las rejas estaban como corresponde. Señaló que donde ocurrió el accidente hay un acceso vehicular, el cual no se puede cerrar, y por ese acceso un peatón puede acceder a la carretera.

DECIMOTERCERO: Que, del análisis de los medios de convicción producidos, consistentes en prueba documental



Foja: 1

acompañada legalmente por ambas partes –y objetada parcialmente por la respectiva contraparte, objeciones que fueron desestimadas según se indica en los motivos undécimo y duodécimo-, y en prueba testimonial rendida legalmente por ambas partes –cuyas tachas fueron desestimadas en los motivos tercero, cuarto y séptimo de esta sentencia-, y todas ellas valoradas en la forma prevista por el legislador, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1. Que el día 19 de febrero de 2016, alrededor de las 14:20 horas, don JAVIER SADARANGANI LEIVA conducía el automóvil placa patente YU-7301 por la segunda pista de circulación de la Ruta 5 Sur, en dirección al sur, comuna de Talca, y al llegar a la altura del kilómetro 252, en forma sorpresiva, el peatón –y tercero en estos autos- don ALVARO MARCELO JANS MINDER, se expuso permanentemente al riesgo de accidente, al permanecer y transitar en la calzada sin adoptar las medidas de seguridad tendientes y necesarias para salvaguardar su vida e integridad física, y sin percatarse de la proximidad del vehículo conducido por don JAVIER SADARANGANI LEIVA, siendo en definitiva atropellado por este vehículo, a causa de lo cual don ALVARO MARCELO JANS MINDER resultó con lesiones de importancia.
2. Que los hechos señalados precedentemente, fueron conocidos en causa RIT 5990-2016, del Juzgado de Garantía de Talca, iniciada por investigación RUC 1600175185-2 de la Fiscalía Local de Talca. En el referido proceso judicial, se decretó con fecha 2 de septiembre de 2016, el sobreseimiento total y definitivo respecto del conductor, don JAVIER SADARANGANI LEIVA, señalando dicho tribunal que los peritajes del accidente del tránsito indican que la víctima se expuso al accidente al transitar por la calzada sin las medidas de seguridad pertinente, de tal manera que los hechos no son



Foja: 1

constitutivos de delito, según lo establece el artículo 250 letra a del Código Procesal Penal.

3. Que, mediante Decreto N° 21 de fecha 12 de enero de 1996, del Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Obras Públicas, se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los Kms. 221,490 y 413,800 de la RUTA 5 SUR, denominadas “CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN”, al consorcio conformado por las sociedades FERROVIAL CHILE LIMITADA, INVERSIONES PORFTOLIO S.A., INVERSIONES CAPITAL INVERSMENTS CHILE LTDA., EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. y CRUZ BLANCA S.A.
4. Que, a raíz de lo indicado en los números 1 y 2 de este apartado, el demandante, don JAVIER SADARANGANI LEIVA, fue sometido a evaluación psicológica por parte del psicólogo don GABRIEL CORREA ROJAS, RUN 17.858.523-1, quien concluyó que, producto del accidente de tránsito al que se refieren los números 1 y 2 de este fundamento, el paciente presenta un cuadro de estrés postraumático combinado con sintomatología ansiosa, agregando que, pese a tener un funcionamiento relativamente normal en su vida cotidiana, recursos cognitivos y una red de apoyo importante, presenta una restricción emocional significativa, manifestada como nerviosismo y agitación mental, generándole dificultad para canalizar su malestar afectivo y superar la situación vivida.

DECIMOCUARTO: Que, en relación al fondo de la **acción principal de indemnización por responsabilidad contractual**, es necesario tener presente que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios resultantes de la infracción de una



Foja: 1

convención válidamente celebrada, es necesaria la reunión de varios requisitos copulativos. En primer lugar, es necesaria la existencia de una obligación de carácter contractual, esto es, nacida de un contrato. En segundo lugar, que el deudor no realice la conducta convenida del modo en que está consagrado en el contrato. En tercer lugar, que la inejecución de la conducta debida esté acompañada de un reproche subjetivo u objetivo al obligado en los términos descritos en la ley. En cuarto lugar, que la omisión de la conducta debida cause daño al acreedor. En quinto y último lugar, que entre el incumplimiento – inejecución de la conducta debida- y el daño exista relación de causa a efecto” (Pablo Rodríguez Grez, “Responsabilidad contractual”, Editorial Jurídica de Chile, año 2012, página 27).

A su vez, es menester precisar que en materia de obligaciones de dar, en el ordenamiento jurídico chileno, la indemnización de perjuicios tradicionalmente se ha entendido como un derecho subsidiario, dada la literalidad del artículo 1489 del Código Civil. Sin embargo, al entender la conceptualización de los efectos de las obligaciones como medios de tutela del acreedor, ello permite entender a la indemnización en este contexto, como un derecho autónomo, y no supeditado al cumplimiento forzado o a la resolución del contrato, tal como sucede frente a la contravención de obligaciones de hacer y de no hacer (artículos 1553 N°3 y 1555 del mismo cuerpo legal).

DECIMOQUINTO: Que, en virtud de lo acreditado en el motivo decimotercero, no se advierte en forma precisa y concreta, la existencia y el contenido de un contrato consensual e innominado relativo al uso de la autopista donde ocurrió el accidente, y que habría sido celebrado entre el actor como usuario de la vía, y entre la demandada como concesionaria de la misma.

A mayor abundamiento, de lo establecido en el N° 3 del motivo decimotercero en relación con el mérito del documento inobjeto que



Foja: 1

se menciona en el N°5 de la prueba instrumental reseñada en el motivo duodécimo, se advierte que en los hechos existe una relación contractual que liga al Estado con el concesionario demandado, mas no una relación contractual entre el concesionario y el usuario de la obra concesionada.

En consecuencia, se colige de lo anterior que no se verifica en la especie el primero de los requisitos copulativos de la responsabilidad contractual demandada, señalado en el motivo decimocuarto, esto es, la existencia de una obligación nacida de un contrato celebrado entre las partes de este juicio, razón por la cual corresponderá **desestimar la acción principal de indemnización por responsabilidad contractual.**

DECIMOSEXTO: Que, procediendo ahora a resolver la **acción subsidiaria de indemnización por responsabilidad extracontractual**, se debe tener presente que, conforme al estatuto de la responsabilidad extracontractual civil, regulado en el Título XXV del Libro IV del Código Civil, los elementos o requisitos de procedencia de dicha responsabilidad son los siguientes: “a) Una acción u omisión del agente. b) La imputabilidad. Esto es, que la acción u omisión se haya efectuado por negligencia o dolo del agente. c) El daño a la víctima. d) La relación de causalidad entre el hecho imputable del agente y el daño sufrido por la víctima. Esto significa que el daño sufrido por la víctima sea consecuencia directa de la acción u omisión imputable del agente. e) La capacidad del autor del hecho ilícito” (Gonzalo Figueroa Yáñez, “Curso de Derecho Civil”, Tomo IV, año 2012, Editorial Jurídica de Chile, página 89).

DECIMOSÉPTIMO: Que, así las cosas, en virtud de lo comprobado en los números 1 y 2 del fundamento decimotercero, en relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo 1712 del Código Civil, este tribunal estima que la causa del accidente sub lite, fue la conducta del tercero don ALVARO MARCELO JANS MINDER, quien



Foja: 1

se expuso al accidente debido a que transitaba por la calzada de la autopista, sin las medidas de seguridad pertinentes y necesarias para salvaguardar su vida e integridad física, y sin percatarse de la proximidad del vehículo conducido por el actor, siendo en definitiva atropellado por este, sin responsabilidad penal por parte del conductor, siendo así declarado por el tribunal con competencia en lo penal que conoció de la respectiva causa, según lo asentado en el basamento decimotercero.

DECIMOCTAVO: Que, a su turno, en cuanto a la identidad del concesionario de la autopista donde ocurrió el accidente referido, y conforme al mérito del documento signado bajo el N°4 de la prueba instrumental reseñada en el motivo undécimo, en relación con el documento signado bajo el N°5 de la prueba instrumental reseñada en el motivo duodécimo, se advierte que la demandada, RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., tiene la explotación de la concesión de la obra pública consistente en el tramo de la autopista donde ocurrió el accidente.

DECIMONOVENO: Que, por otro lado, los principales textos normativos que rigen las concesiones de obras públicas en Chile son los siguientes:

i) El Decreto con fuerza de ley N° 850 del Ministerio de Obras Públicas, de 12 de septiembre de 1997, publicado en el Diario Oficial de 25 de febrero de 1998, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, y del Decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, cuyo artículo 87 autoriza al Ministerio de Obras Públicas para ejecutar obras públicas mediante el sistema de concesiones, aludiendo luego (en su artículo 88) a la normativa específica que las regulará.

ii) El Decreto N° 900 del Ministerio de Obras Públicas, de 31 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial de 18 de diciembre de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del



Foja: 1

Decreto con fuerza de ley N° 164 del Ministerio de Obras Públicas, de 1991 (comúnmente llamado “Ley de Concesiones de obras públicas”);
y

iii) El Reglamento del Decreto con fuerza de ley N° 164 del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, modificado por las Leyes N° 19.252 de 1993 y y N° 19.460, de 1996, contenido en el Decreto N° 956 del Ministerio de Obras Públicas de 6 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial de

20 de marzo de 1999 (comúnmente llamado “Reglamento de la Ley de Concesiones de obras públicas”), el cual por mandato normativo forma “parte integrante de los contratos de concesión que celebre el Ministerio de Obras Públicas” en la materia (artículo 1° inciso 1°).

Además, a tales textos se añaden los instrumentos regulatorios específicos aplicables a cada obra concesionada, dentro de los cuales destacamos, desde ya, las “Bases de Licitación”, la “Oferta Técnica y Económica” presentada por el adjudicatario de la concesión en la forma aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, los decretos supremos de adjudicación respectivos, el correspondiente contrato de obra pública, y el “Reglamento de Servicio de la Obra”, entre otros.

VIGÉSIMO: Que, del contenido de la normativa referida precedentemente, se advierte que en nuestro país, existe la obligación del concesionario de obras viales de garantizar la seguridad de los usuarios en la utilización de las obras concesionadas, la cual es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual que le puede afectar.

A nivel legal, la obligación de seguridad analizada tiene como principal fundamento lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas –referida en el motivo decimonoveno-, el cual, tratando de los derechos y obligaciones del concesionario dentro del régimen jurídico durante la fase de explotación, le impone el



Foja: 1

deber de asegurar “la continuidad de la prestación del servicio” la cual “le obligará, especialmente”, añade la norma, a “facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación” (artículo 23 N° 2 letra b).

Por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas –señalado en el motivo decimonoveno-, dispone: “La sociedad concesionaria deberá adoptar, durante la concesión, todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesión de la obra”.

A partir de tales preceptos, es posible concluir que el concesionario vial tiene la obligación de garantizar a los usuarios la seguridad en la utilización de las obras concesionadas, obligación propia de todo ente explotador de una actividad que puede provocar riesgo a terceros, y cuyo reconocimiento legal se funda en la intensidad y probabilidad del daño, el costo de evitar los accidentes y el tipo de relación entre el autor del daño y la víctima. Como recuerda la Excma. Corte Suprema, las “exigencias de normalidad del servicio” imponen que las vías deben estar “despejadas, libres de toda perturbación y dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad” (Corte Suprema, sentencia de 17 de agosto de 2011, rol N° 6370-2009), obligación que además ha sido entendida como constante y permanente, existiendo el derecho a cobrar tal tarifa por cada distancia usada, kilómetro o metro de camino de que se trate, el cual es equivalente la obligación de mantener en correcto estado similar distancia.



Foja: 1

Además de lo anterior, tanto la Ley de concesiones de obras públicas como el Reglamento, reconocen que el concesionario tiene la obligación de responder por los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de su explotación hayan podido sufrir los usuarios o terceros, a menos que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, después de haber sido adjudicado el contrato (artículos 35 de la Ley y 62 N° 1 del Reglamento).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en virtud de lo expresado en los motivos decimoséptimo y vigésimo, se advierte que, en la especie, la sociedad concesionaria demandada incumplió su obligación legal de seguridad para con el demandante, y usuario de la vía concesionada, al no haber adoptado las medidas pertinentes para evitar el riesgo consistente en el ingreso, a la calzada de la autopista, del peatón que causó el accidente, de lo cual se colige que la demandada ha incurrido, al menos, en culpa infraccional.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al daño emergente alegado por el actor, de la prueba rendida, no se advierten elementos de convicción suficientes que permitan determinar en forma precisa, grave y concreta, la existencia y monto del daño emergente cobrado.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al daño moral cobrado en autos, dicho perjuicio es el que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona víctima del daño. Al respecto, además de las dificultades de prueba del daño moral, los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria (Hernán Corral Talciani, "Lecciones de responsabilidad civil extracontractual", Editorial Jurídica, año 2011, página 167).

En este contexto, y en virtud de lo comprobado en el N° 4 del motivo decimotercero, el tribunal tendrá por establecido el daño moral sufrido por el demandante a causa del incumplimiento de la obligación



Foja: 1

legal de seguridad por parte de la demandada, y en atención al contenido del cuadro psicológico diagnosticado al actor, se regulará prudencialmente la suma cobrada, en la cantidad de \$5.000.000.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en consecuencia, en virtud de lo establecido en los motivos decimoséptimo al precedente, corresponderá **acoger parcialmente la acción subsidiaria de indemnización por responsabilidad extracontractual**, en los términos que en definitiva se señalan en lo resolutivo.

VIGÉSIMO QUINTO: Que las demás pruebas rendidas, en nada alteran los fundamentos y la decisión sobre el fondo de la acción subsidiaria.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los preceptos legales citados por las partes, y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432 y 433, todos del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve:**

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

A) Que se desestiman las tachas opuestas por la demandada contra el testigo de la demandante, GABRIEL IGNACIO CORREA ROJAS, en virtud de lo dispuesto en los motivos tercero y cuarto.

B) Que se desestima la tachas opuesta por el demandante contra el testigo de la demandada, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RUBIO, en virtud de lo dispuesto en el motivo séptimo.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

C) Que se **desestima la acción principal** de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, en razón de lo dispuesto en el motivo decimoquinto.

D) Que se **acoge parcialmente la acción subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad**



Foja: 1

extracontractual, en conformidad con lo decidido en el fundamento vigésimo cuarto, y en consecuencia, se declara la obligación de la demandada, de indemnizar al demandante por el daño moral sufrido por este, en la cantidad de \$5.000.000, reajustada en la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia, y la fecha del pago efectivo; y se desestima en lo demás.

E) Que no se condena en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente vencida, en virtud de lo previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

ROL C-39.832-2018.

DICTADA POR DOÑA SUSANA RODRÍGUEZ MUÑOZ, JUEZA.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, quince de Septiembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXRCXBWETCK

